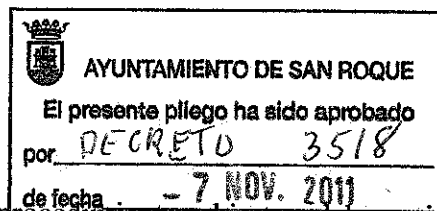


PLIEGO DE CLÁUSULAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA EL SERVICIO DE CELADURÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES DEL SAN ROQUE.



Cláusula 1.- Objeto del contrato.-

Constituye el objeto del contrato la realización, por ~~procedimiento abierto, del servicio de~~ CELADURÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES.

Las cláusulas de este pliego y del pliego de cláusulas técnicas que se incorpora al expediente, se consideran parte integrante del contrato y podrán ser examinados en la forma que se determine en el anuncio de licitación, debiendo ser firmados por el adjudicatario, como muestra de conformidad, en el acto de formalización del contrato.

Cláusula 2.- Duración del contrato.-

La duración del presente contrato será de dos años a contar del siguiente a la firma del contrato administrativo, pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por el plazo de dos años más, previo acuerdo expreso de las partes que habrá de producirse antes de la finalización del plazo originario.

El contrato prorrogado no podrá ser modificado en ninguno de sus términos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la prórroga es una continuación del contrato original.

Cláusula 3.- Organo de Contratación

El órgano de contratación, es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Roque, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Cláusula 4.- Perfil del órgano de contratación

El órgano de contratación difundirá a través del perfil del contratante del Ayuntamiento (<http://www.sanroque.es> (PERFIL DEL CONTRATANTE), la información relativa a la adjudicación del presente contrato, así como cuantos otros datos e información relativa a la presente contratación, se considere de interés para los interesados.

Cláusula 5.- Precio del servicio

El precio del contrato se fija en 161.017, 00 €, anuales, más 28.983, 00 €, en concepto de IVA.

Cláusula 6.- Procedimiento de adjudicación

En el presente contrato, se utiliza como procedimiento de adjudicación, de conformidad con el art. 122.2 de la LCSP, el procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16.1b) de la LCSP, el presente contrato queda sujeto a regulación armonizada.

Cláusula 7.- Financiación

Consta en el expediente retención de crédito, en la que hace constar que sí existe consignación suficiente para la financiación del servicio público referido, en la partida del 341.00.227.00 presupuesto Municipal para el ejercicio 2011.

Cláusula 8.- Revisión de precios

El contratista tendrá derecho a la revisión de precios, según IPC.

Cláusula 9.- Pago del precio del contrato

La Administración quedará obligada a abonar al contratista el precio del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de las correspondientes facturas, las cuales deberán ir visadas por el Teniente de Alcalde competente en la materia a los efectos de acreditar el efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de demora por el Ayuntamiento en el pago del precio, éste deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los dos meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Ayuntamiento, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora del Ayuntamiento fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Cláusula 10.- Aptitud para contratar con la Administración

10.1.- Condiciones de Aptitud para contratar.

Sólo podrán contratar con la Administración, las personal naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar contemplados en el artículo 49 de la LCSP, y **se encuentren debidamente clasificadas en:**

GRUPO 0
SUBGRUPO 1
CATEGORÍA B

Así mismo los empresarios deberán contar con personal habilitado (habilitación empresarial

o profesional) para la realización de la prestación que constituye el objeto del presente contrato. Dicha habilitación deberá ser acreditada en la documentación administrativa que constituye el sobre A de la proposición correspondiente.

10.2.- Normas especiales sobre capacidad de las personas jurídicas.

Las personas jurídicas **sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.**

10.3.- Capacidad de las empresas no españolas de Estados miembros de la U.E.

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, tendrán capacidad aquellas empresas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, debiendo acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

10.4.- Capacidad de los demás empresarios extranjeros.

Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de las empresas extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga.

Así mismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que están inscritas en el Registro Mercantil.

10.5.- Capacidad de las Uniones Temporales de Empresas.

Así mismo, se podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

10.6.- Prohibiciones de contratar.

En ningún caso podrán contratar con este Ayuntamiento las personas en quienes concurran algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

10.7.- Condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberán acreditar estar debidamente clasificados en los términos expuestos en la cláusula 10.1.

No obstante, además de la acreditación de estos requisitos mínimos de solvencia antes expuestos, los licitadores deberán especificar en su oferta, los nombres y cualificación del personal responsables de ejecutar la prestación.

Así mismo, los licitadores, deberán comprometerse en sus respectivas ofertas, a adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes. Este compromiso formará parte del contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 206.g) de la Ley 30/2007 y su incumplimiento determinará la posibilidad de imponer una pérdida equivalente al 5 % del precio del contrato.

Cláusula 11.- Acreditación de la aptitud para contratar.-

11.1 Acreditación de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

11.2 Acreditación de la clasificación:

Los acuerdos relativos a la clasificación podrán adoptarse bien por las Comisiones clasificadores de la Junta Consultiva de Contratación Administrativas del Estado, bien por la Comisión Clasificadora de la Comisión Consultiva de contratación administrativa de la Junta de Andalucía.

Los primeros acuerdos producirán efectos generales frente a todos los órganos de contratación. Los segundos, únicamente serán eficaces a efectos de contratar con las entidades

locales incluidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por otra parte, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras.

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Todos estos acuerdos o certificados deberán ir acompañados de una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en su contenido no han experimentado variación.

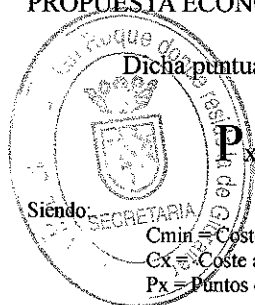
Cláusula 12- Criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato.-

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se le atribuye:

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto mediante la forma de concurso – público. Para ello se establecerán los siguientes criterios de valoración para su adjudicación:

PROPUESTA ECONÓMICA; Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

Dicha puntuación se calculará de la aplicación de la siguiente fórmula;



$$P_x = 20 * (C_{min} / C_x)$$

C_{min} = Coste anual mínimo propuesto por los ofertantes.

C_x = Coste anual propuesto por el ofertante X.

P_x = Puntos obtenidos por el ofertante X.

PROPUESTA TÉCNICA; Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Dicha puntuación se calculará de la valoración de los siguientes criterios:

a) Mejoras al Proyecto Técnico; Hasta 3 puntos.

Atendiendo a los siguientes criterios, teniéndose que cuantificar económicamente cada una de las propuestas;

- * Mejoras en los equipamientos deportivos y mobiliario existente en las instalaciones a mantener..... 1 punto
- * Mejoras en el número de horas de servicios a prestar o en los horarios de apertura de las instalaciones deportivas..1 punto
- * Aportaciones encaminadas a la promoción del deporte sanroqueño..... 0'50 punto
- * Medios a aportar por la empresa en trabajos relacionados con el cuidado del césped natural 0'50 punto

Dicha puntuación se calculará de la aplicación de la siguiente fórmula;

$$P_x = 3 * (M_x / M_{max})$$

Siendo:

Mx = Coste total de las mejoras propuestas por el ofertante X.

Mmax = Coste total de las mejoras máximas de las propuestas presentadas por los ofertantes.

Px = Puntos obtenidos por el ofertante X.

b) Proyecto Técnico; Hasta 2 puntos.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1) Organigrama del Servicio propuesto Hasta 1 punto.

c) Descripción y organización del servicio, teniendo en cuenta: Hasta 1 punto

c.1. Funciones del personal 0'20 puntos.

c.2. Cuadros de frecuencias de limpieza 0'20 puntos.

c.3. Cuadros de frecuencias de tareas de mantenimiento preventivo.... 0'20 puntos

c.4. Tiempo de ejecución de reparaciones y actuaciones de las tareas de mantenimiento correctivo 0'20 puntos

c.5. Calidades y certificaciones de los medios materiales a aportar para la ejecución del servicio 0'20 puntos

No obstante, el órgano de contratación se reserva la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso.

Cláusula 13.- Apreciación ofertas con valores anormales o desproporcionados.-

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la Ley 30/2007, se establecen en el presente apartado, los criterios en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. Estos serán los previstos en el artículo 85 del RGLAP. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se seguirá la tramitación prevista en el apartado 3 y 4 del art. 136 de la Ley 30/2007.

Cláusula 14.- Propositiones y documentación complementaria.-

14.A) LAS PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN.-

El plazo para la presentación de las proposiciones será de 52 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Comisión Europea y al BOE.

Las proposiciones se presentarán en el lugar señalado en el anuncio de licitación. Si este plazo terminase en sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

También podrán enviarse por correos, dentro del plazo de admisión señalado, según lo establecido en el artículo 38.4 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a este Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante fax, telex o telegrama el mismo día (art. 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).

No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del plazo, no serán

admitidas ninguna proposición enviada por correo.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

Su presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad o reserva alguna.

Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinas o dependencias municipales, en la forma, lugar y tiempo, señalado en el anuncio de licitación.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

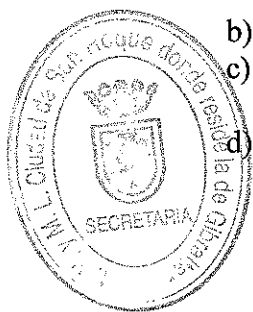
En la proposición deberá indicarse, como PARTIDA INDEPENDIENTE el importe del IVA.

14.B) CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.-

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados en los que figurará la inscripción PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "-----", con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente.

El sobre A se subtitulará "PROPUESTA Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA" y contendrá los siguientes documentos:

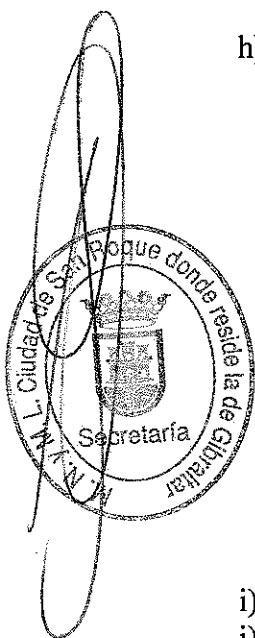
- a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada, cuando se trate de empresarios individuales.
- b) CIF de la empresa o fotocopia compulsada.
- c) Original o copia compulsada de escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
- d) Original o copia compulsada de escritura de constitución o modificación, en su caso, de la Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundamental, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
- e) Los licitadores deberán aportar la acreditación de la clasificación de la empresa, en los términos expuestos en los art. 57, 58 y 59 de la Ley 30/2007, y en el presente pliego.



Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

El referido certificado deberá ser aportado por el interesado.

- f) Una declaración responsable ante notario, autoridad judicial o Secretaría General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar, contempladas en el art. 49 de la Ley 30/2007. Esta declaración comprenderá, además, expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que, la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
- g) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- h) En los supuestos de uniones de empresarios, dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar ante la Administración un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Para que sea eficaz la U.T.E. en la fase de licitación, bastará con que en la documentación se aporte escrito firmado por los representantes legales de todas las empresas participantes, indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyan, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. No es necesaria la formalización de la unión de empresarios en escritura pública hasta tanto no se haya efectuado la adjudicación a su favor.
- Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica.
- i) Póliza de responsabilidad Civil y último recibo de pago.
- j) Último recibo de abono del I.A.E. o documento acreditativo de exención .
- k) Acreditación de los títulos exigidos, así como de la habilitación del personal propuesto para realizar las prestaciones del contrato.
- l) Nombres y cualificación del personal responsable de ejecutar la prestación.
- m) compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes. Este compromiso formará parte del contrato con carácter de obligación esencial.
- n) En su caso, dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.



Toda documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.

El sobre B se subtitulará “OFERTA ECONOMICA” y contendrá:

La proposición con arreglo al siguiente:

MODELO

D. _____, en nombre propio (o en representación de _____), mayor de edad, de profesión _____, domicilio en _____ y con D.N.I. núm. _____, teniendo conocimiento de las cláusulas del pliego de condiciones que rige la contratación de “_____”, se compromete a su ejecución con estricta sujeción al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, al pliego de prescripciones técnicas y las cláusulas contractuales, por un precio de _____ euros (en letra y número) más IVA.

HAGO CONSTAR:

1. Que cumpla todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. Que acepto plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas las demás obligaciones que se deriven, sin salvedad o reserva alguna.
3. Que me comprometo a realizar el _____, en el precio de _____ euros (en letra y cifras), más IVA, (en Canarias IGIC incluido). (IVA se incluirá como partida independiente).
4. Que adjunto la documentación exigida.

Cláusula 15.- Constitución de la Mesa de Contratación y apertura de plicas.-

Según acuerdo de pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011, la mesa de contratación estará integrada del siguiente modo:

Presidente: Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Carlos Ruiz Boix.

Vocales: D. Manuel Melero Armario.
D. Jesús Mayoral Mayoral.
D^a. Dolores Marchena Pérez.
D. Juan José Puerta Delgado.
Sra. Secretaria General.
Sra. Interventora de Fondos.

Secretario de la mesa : Sr. Técnico de Gestión de Contratación.

A los efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, la Mesa se constituirá en la fecha y lugar, que será anunciada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el perfil del contratante, junto con su composición, con una antelación de siete días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Para la calificación de la documentación presentada en el Sobre A, el Presidente ordenará la apertura de los sobres y el secretario de la mesa certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos, conforme a la cláusula 13 del pliego.

En el supuesto de que se aprecien faltas subsanables, se concederá un plazo de 3 días hábiles

para su subsanación, lo que comunicará verbalmente a los licitadores, levantándose acta en la que se haga constar tal circunstancia cuya copia se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Los licitadores que no hayan comparecido serán notificados vía fax, telegrama o correo electrónico, dejando constancia de dicha notificación en el expediente.

De lo actuado se dejará constancia en el expediente administrativo.

Una vez calificada la documentación anterior y subsanada, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la mesa determinará las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, fijados en la cláusula 13 con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

Una vez realizadas las actualizaciones previstas en los párrafos anteriores tendrá lugar el **acto público** de aperturas de proposiciones que se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado.

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de las que dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del órgano de contratación o del que se fije en los pliegos la reanudación del acto público una vez que todo se haya quedado aclarado en la debida forma.

Seguidamente, el presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos con expresión de las admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 de este Reglamento.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición o, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable será desechada por la Mesa en resolución motivada.

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, continuando la Mesa reunida a los efectos de valorar y clasificar las proposiciones presentadas,

conforme a los criterios de adjudicación previstas en el presente pliego.

De todo lo actuado, se levantará acta suscrita por todos los componentes de la Mesa, donde se incorporará la propuesta de adjudicación provisional al licitador seleccionado, que será elevada al órgano de contratación competente para que la asuma. No obstante, en el caso de que éste no admita la propuesta de la mesa, deberá justificarlo debidamente.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de la adjudicación provisional.

Cláusula 16.- Adjudicación del contrato.-

El órgano de contratación requerirá al licitador seleccionado por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtenerla directamente, así como de haber constituido la garantía que proceda.

Si el licitador seleccionado no atendiera al requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Recibida la referida documentación, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los demás licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Además, ésta deberá contener la información que permita a los demás licitadores excluidos o descartados imponer los recursos oportunos contra la decisión de la adjudicación. Así, en particular, atendiendo al apartado 4 del artículo 135 de la LCSP, deberá expresar los siguientes extremos:

1. En relación con los licitadores descartados, una exposición resumida de las razones por las que sus ofertas han sido descartadas.
2. Con respecto a los licitadores excluidos de la licitación, también de forma resumida, las razones por las que sus ofertas no fueron admitidas.
3. El nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario que hayan determinado su selección con preferencia a las ofertas presentadas por los restantes licitadores admitidos.

Cláusula 17.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.-

El contratista tendrá que estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

El contratista deberá incluir en su proposición una declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de

tal requisito deba presentarla antes de la adjudicación, dentro del plazo que a tal efecto se le conceda, y ello, en cumplimiento del art. 135.4 de la LCSP y en los términos expuestos en el artículo 15 del RGLCAP.

Cláusula 18.- Formalización del contrato.-

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, no antes de que transcurran quince días hábiles contados desde la práctica de la notificación de la adjudicación a los demás licitadores y candidatos presentados, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, conforme dispone el art. 140 de la LCSP. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, sin que se hubiera interpuesto el recurso especial en materia de contratación, previsto en el artículo 37 de la LCSP y regulado en el Libro IV de dicha Ley, que lleva aparejado la suspensión de la formalización del contrato, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción del presente requerimiento.

Al contrato se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsadas.

La no formalización del contrato en plazo, por causa imputable al contratista, es causa de resolución del mismo. En tal supuesto procederá la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Cláusula 19.- Publicación de la formalización del contrato.-

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.

Además, se publicará, en el BOE y en el Diario Oficial de la Unión Europea, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Cláusula 20.- Ejecución del contrato.-

El plazo de inicio de la ejecución del presente contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización del contrato. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las

órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

Esta obligación por parte del contratista tiene la consideración de esencial, por lo que su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato, debiendo indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, en los términos expuestos en el artículo 206 y 208 de la LCSP.

Cláusula 21.- Riesgo y ventura del contratista.-

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, salvo en los supuestos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista.

Son casos de fuerza mayor los siguientes:

- a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
- b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
- c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

Cualquiera que sea el tipo de la gestión del servicio público, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios haya sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento será responsable el mismo dentro de los límites señalados en las leyes (art. 198 LCSP).

El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Así mismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para el mismo pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones.

Cláusula 22.- Garantía definitiva.-

El órgano de contratación requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta económica más ventajosa para la Administración, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el



presente pliego, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, constituya la debida garantía definitiva, equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

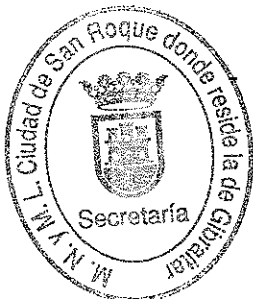
La garantía definitiva podrá prestarse por cualquiera de las formas siguientes:

1. En metálico o en valores públicos o privados. El metálico, los valores o los certificados correspondientes se depositarán en la Tesorería del Ayuntamiento.
2. En aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en España y presentado ante el correspondiente órgano de contratación.

Con relación a **la garantía constituida mediante aval**, el art. 56 y 58 del Reglamento 1098/01, de 12 de octubre, señala que para que el aval pueda ser admitido en la contratación con la Administración, deberá ser:

- **Solidario respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de la caja de depósito del Municipio.**
- **De duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano a cuya disposición se constituya resuelva expresamente la cancelación del aval, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 65 del mismo Reglamento.**

Autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan poder suficiente para obligarla plenamente. Estos poderes deberán ser bastanteados previamente y por una sola vez por la *Abogacía del Estado, por Diligencia Notarial o por la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque*, requisito cuyo cumplimiento quedará reflejado en el texto del aval. Siendo también necesario acompañar copia de los referidos poderes debidamente bastanteados.



Las garantías definitivas constituidas mediante aval bancario se ajustarán

MODELO AVAL BANCARIO

La Entidad (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*), NIF, con domicilio (*a efectos de notificaciones y requerimientos*) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (*nombre y apellidos de los apoderados*), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA a: (*nombre y apellidos o razón social del avalado*), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo para responder de las obligaciones siguientes: (*detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el avalado, especificando si se trata de garantía provisional, definitiva o total*), ante **El Ilustre Ayuntamiento de San Roque**, por importe de: (*en letra y en cifra*).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión.

El Avalista asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, en los términos establecidos por Ley de Contratos del Sector Público.

El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento autorice expresamente su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.

(Lugar y fecha)

(Razón social de la entidad)

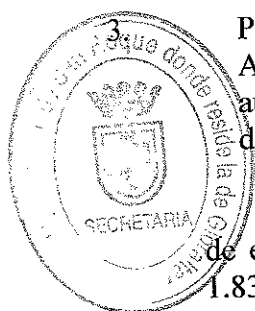
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE, POR DILIGENCIA NOTARIAL O POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO.

*** ABOGACÍA DEL ESTADO: REQUIERE COPIA DEL BASTANTEO CON N° DE REGISTRO, FECHA Y LUGAR IGUAL AL QUE APARECE A PIE DEL AVAL**

*** MODELO DE DILIGENCIA DE NOTARIO EN REVERSO:**

- “Tras examinar los poderes otorgados por la Entidad Financiera el firmante tiene poder suficiente para comprometer a la Entidad Financiera en el acto que realiza “.



Por contrato de seguro de caución –que se ajustarán al modelo establecido por este Ayuntamiento, y que se señala al final de este apartado- con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente órgano de contratación.

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil.

El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas:

- Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la Administración contratante.
- La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía.
- El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El aval o contrato de seguro de caución deberá depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento.

MODELO CERTIFICADO SEGURO DE CAUCION

La Entidad (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*), NIF, con domicilio (*a efectos de notificaciones y requerimientos*) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (*nombre y apellidos de los apoderados*), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA a: (*nombre y apellidos o razón social del avalado*), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo para responder de las obligaciones siguientes: (*detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el avalado, especificando si se trata de garantía provisional, definitiva o total*), ante **El Ilustre Ayuntamiento de San Roque**, por importe de: (*en letra y en cifra*).

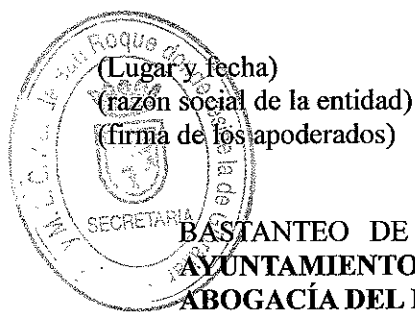
La entidad aseguradora declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, en el caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ilustre Ayuntamiento de San Roque en los términos establecidos por Ley de Contratos del Sector Público.

El presente Seguro estará en vigor hasta que el Ayuntamiento autorice expresamente su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.



BASTANTEO DE PODERES POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE, POR DILIGENCIA NOTARIAL O POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO.

* ABOGACÍA DEL ESTADO: REQUIERE COPIA DEL BASTANTEO CON N° DE REGISTRO, FECHA Y LUGAR IGUAL AL QUE APARECE A PIE DEL AVAL

* MODELO DE DILIGENCIA DE NOTARIO EN REVERSO:

- “ Tras examinar los poderes otorgados por la Entidad Financiera el firmante tiene poder suficiente para comprometer a la Entidad Financiera en el acto que realiza “.

Cláusula 22.- Cumplimiento y liquidación del contrato.-

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya prestado la totalidad del servicio a satisfacción de la Administración.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de conformidad.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de la conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Cláusula 23.- Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto del contrato.

La constitución en mora del contratista no precisa de intimación por parte de la Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora, respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por resolver el contrato o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 0,20 euros por cada 100 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el múltiplo de 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para la resolución del contrato o continuar con la ejecución del contrato con imposición de nuevas penalidades.

Si se produce retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, el Ayuntamiento podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LCSP.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto del incumplimiento de los plazos parciales previstos para la ejecución sucesiva del contrato por parte del contratista.

Por otra parte, cuando el contratista, por causa imputable al mismo, hubiera incumplido la ejecutividad parcial de las prestaciones del contrato, la Administración podrá optar por resolver el contrato o por su continuación con la imposición de penalidades diarias en proporción de 1 por cada 30 € del precio del contrato.

En el supuesto de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, la Administración podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien acordar la imposición de penalidades que no podrá superar el 10% del precio del contrato, que serán fijadas en proporción a la gravedad del incumplimiento, valorado por la Administración atendiendo, en los perjuicios que dicho incumplimiento haya ocasionado o pueda ocasionar a esta Entidad contratante, y a los usuarios del servicio, así como, a la repercusión que dicho incumplimiento pueda comportar respecto al total de la prestación.

Así mismo, el incumplimiento por parte del contratista de su compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales o materiales aportados en la fase de licitación como condición cumplimentada de su solvencia técnica, podrá conllevar la imposición de penalidad, en los términos expuestos en el apartado anterior.

Cláusula 24.- Plazo de garantía y responsabilidades a las que afecta.

El plazo de garantía se fija por todo el plazo de duración del contrato.

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:

- De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato.
 - De la correcta ejecución del contrato.
 - De los gastos originados a la Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.
 - De los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.
 - De la incautación que pudiera decretarse en los casos de resolución del contrato.
- Del incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.



Cláusula 25.- Preferencia en la ejecución de la garantía definitiva.-

Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión.

Si el contratista descuidase el servicio, se ejecutarán, por la propia Administración, y a costa de la garantía definitiva, los trabajos necesarios para evitar el daño.

Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que ésta afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en la normativa aplicable.

Cláusula 26.- Cancelación y devolución de la garantía definitiva.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido satisfactoriamente la conclusión del contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución o cancelación deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. La Administración deberá abonar al contratista la cantidad adecuada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde la conclusión del contrato hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88.

Cláusula 27.- Gastos de licitación y publicación.-

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales, los que deriven de la preparación y adjudicación del contrato, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deberá ser soportado por el Ayuntamiento, que se indicará como partida independiente.

Se considerarán también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

Cláusula 28.- Causas de resolución y extinción del contrato.-

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de las causas previstas en los artículos 206 y 262 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 264 de la LCSP.

Cláusula 29.- Modificación del contrato.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes de la LCSP, introducidos por la nueva Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una vez perfeccionado el presente contrato, mediante su formalización, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los siguientes supuestos y con las siguientes condiciones, límite y alcance:

La variación del número de horas de servicios contratadas, ya sea por necesidades del propio servicio, o por la modificación de la prestación en alguna de las instalaciones deportivas, por cierre de alguna instalación en las que se realizan los servicios, o por apertura de alguna nueva dependencia municipal. En tales casos, ambas partes tendrán que estar de acuerdo en la modificación establecida.

La necesidad de la modificación deberá quedar debidamente justificada en el expediente.

En cualquier otro supuesto, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro III.

En ningún caso, la modificación del contrato podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.

Las modificaciones que se realicen en los términos antes expuestos seguirán el procedimiento siguiente:

1. Memoria justificativa suscrita por el técnico nombrado responsable de la ejecución del contrato, en la que justifique debidamente la necesidad de la modificación, las razones de interés públicos que la motivan y su inclusión en los supuestos y condiciones previstas en esta cláusula.
2. Audiencia al contratista por el plazo de cinco días.
3. Informe de la Secretaría General.
4. Informe de la Intervención de fondos, sobre la existencia de consignación presupuestaria para el cubrir el mayor gasto que conlleve la modificación, así como la fiscalización de cuantos aspectos considere de su competencia.

5. Resolución del órgano competente aprobando la modificación del contrato.

La modificación del contrato deberá formalizarse en documento administrativo.



Cláusula 30.- Prerrogativas de la Administración.-

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que puedan plantearse sobre el cumplimiento del contrato, modificarlo en los términos expuestos en la cláusula anterior, así como acordar su resolución y los efectos de la misma.

Cláusula 31.- Cesión del contrato.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión del servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado en las mismas condiciones que el cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición para contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondería al cedente.

Cláusula 32.- Subcontratación.-

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación en los términos que a continuación se exponen:

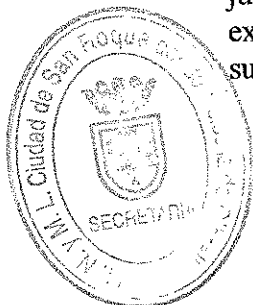
- a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al licitador de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.

- b) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones siguientes; salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos:

1. Parte de la prestación que se pretende subcontratar.
2. Identidad del subcontratista.
3. Justificación de la aptitud de éste para ejecutarla, por referencia las condiciones de solvencia técnica o profesional. En el caso de que ostente clasificación suficiente, ésta suplirá a la necesidad de justificar la solvencia antes referida.

- c) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación.



- d) La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

Cláusula 33.- La no aplicación del supuesto de la subrogación de empresas.-

Una vez ejecutado el contrato y expirada la relación jurídica-administrativa entre este Ayuntamiento y el adjudicatario, no resultará de aplicación el artículo 44 del Estatutos de los Trabajadores, por no tratarse del supuesto de hecho contemplado en el mismo, y, en consecuencia, no creará derecho alguno entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria en lo que se refiere a la relación laboral de los trabajadores que esta última tenga contratados.

En consecuencia, el convenio colectivo será aquél que no establezca obligatoriedad para este Ayuntamiento de subrogarse en la posición del adjudicatario una vez finalizado el contrato en lo que a la relación jurídico laboral con los trabajadores se refiere.

Cláusula 34.- Régimen Jurídico.-

La contratación a realizar se califica como contrato de gestión de servicios públicos de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 19 de la LCSP.

En lo no previsto en las presentes cláusulas resulta de aplicación las prescripciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; en todo lo no opuesto a la misma, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; cuantas otras normas administrativas resulten de aplicación; así como los preceptos del Código Civil que pudieran resultar de aplicación supletoria.

Cláusula 35.- Jurisdicción competente.-

Todas las cuestiones o divergencias que pueden surgir se resolverán por la vía administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa.

En San Roque a 13 de octubre 2011

La Secretaria General

Fdo: Ana Núñez de Cossío

